En Marcha

2ª Época | Nº 18 | Septiembre de 2018

Boletín Informativo de Falange Española de las JONS

Los socialistas y la reforma laboral del PP

El nuevo Gobierno de Sánchez da ahora por buena la reforma laboral del Partido Popular

El mes de agosto finalizó con la destrucción de más de 200 mil empleos. Sólo el viernes 31 15.000 españoles perdieron su trabajo, cifra record que hizo acreedor a ese día del calificativo de "viernes negro".

La crisis económica no ha pasado. Y no sólo porque estemos ante un nuevo retroceso (desaceleración) de la economía. Sino porque, en realidad, la crisis vino para quedarse.

La reforma laboral del PP ahondó en la precarización del empleo, una de cuyas manifestaciones es la temporalidad, cuya tasa se acerca en España al 30 %.

Ambos gobiernos siguen las políticas dictadas desde fuera

Pedro Sánchez, ahora Presidente del Gobierno, se comprometió públicamente a derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy nada más llegase a La Moncloa. Pero ya ha anunciado que no se va a tocar, salvo en algún aspecto menor.

No nos sorprende. Pese a la retórica, la propuesta económica de socialistas y populares es muy similar. Sobre todo porque se limitan ambos a obedecer las consignas que en la materia llegan desde Bruselas, el FMI, el Banco Mundial y demás organismos internacionales. Organismos que diseñaron para España un modelo productivo basado en el turismo y los servicios, obligando a España a desmantelar todo su tejido productivo, haciéndola una economía dependiente.

Con la izquierda en el Gobierno, parecería que las reivindicaciones laborales y sociales se han desvanecido. Aparentemente, ni están en peligro las pensiones, ni el paro es un problema, ni lo es la precariedad o las deficiencias en los servicios públicos.

Pero la realidad cotidiana para centenares de miles de hogares en España es muy distinta. Los problemas no se han esfumado. Afortunadamente el rostro de la pobreza en España no es el de ejércitos de famélicos mendigando alimentos en las calles. Pero hay miles de hogares con todos sus miembros en paro. Miles de familias que han perdido su vivienda por no tener empleo. Padres que cada mes deben elegir si pagar el alquiler o el dentista de los niños porque el salario no da para las dos cosas. Y todos estos no van a ver mejorada su situación porque el Gobierno saque a Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Por eso, ahora más que nunca, con la izquierda en el Gobierno, es necesario seguir enarbolando la bandera de la justicia social. Y exigirle, como antes se lo exigimos al Gobierno del PP, que derogue una reforma laboral que no ha servido para acabar con el paro y sí para precarizar –aún más- el empleo y empobrecer a los españoles.

Deben ser ilegalizadas las organizaciones secesionistas

Dividir la nación es una idea despreciable a la que los falangistas nos oponemos.

La idea de que los acontecimientos del pasado curso –referéndum ilegal, declaración de independencia, etc.– protagonizados por el Parlamento y la Generalitat de Cataluña, constituyeron un golpe de Estado, es una idea ya ampliamente aceptada por parte de las fuerzas políticas y mediáticas del Régimen del 78.

Sorprende –indigna– por ello la actitud pusilánime con la que se afrontó y se afronta la intentona secesionista desde esas mismas fuerzas. Sobre todo desde el Gobierno de España, que es quien debería estar dirigiendo la ofensiva contra el separatismo.

Tanto antes con Rajoy, como ahora con Sánchez ¿cómo es que no ha puesto el Gobierno de España todo su empeño en desarticular el golpe secesionista? Nos referimos al entramado de organizaciones, asociaciones, partidos, medios de comunicación e instituciones que hicieron posible el golpe y que continúan siendo legales, preparando otra embestida. ¿Cómo es posible que los golpistas sigan al frente de las instituciones autonómicas tras lo sucedido?

Los partidos del Régimen del 78 –los de izquierda y también los de derecha, si es que sigue existiendo la diferencia- creen que el separatismo es una opción legítima. Tan legítima como cualquier otra, dicen. Como si debiésemos conceder los mismos derechos a la verdad y a la mentira, al bien y al mal, a lo justo y a lo injusto.

Lo único que le piden es que respete los procedimientos establecidos. El secesionismo es legítimo, siempre que no se salte la ley, aseguran.

Esa creencia es la que nos atasca en este callejón sin salida. Porque no es posible mantener en la legalidad al secesionismo pero pretender prohibirle que alcance sus objetivos.

Los falangistas, en cambio, creemos que la intención de mutilar a la nación es una idea despreciable. Se pretenda llevar a cabo a través de un golpe institucional, mediante la fuerza o mediante una farsa de referéndum pactado con el Estado, tal y como Sánchez ha ofrecido a los golpistas a cambio de su apoyo al inestable Gobierno

El separatismo es ilegítimo. Por eso debe ser ilegal. La intencionalidad separatista expresada en los estatutos de partidos y asociaciones debería ser motivo suficiente para su ilegalización. Así de sencillo.

El encaje legal de la ilegalización de los grupos secesionistas es muy evidente a la luz del Artículo 22 de la Constitución: "Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales".

Esa es nuestra "propuesta de pacto" con los secesionistas. Su ilegalización y el encarcelamiento de quienes promuevan la desmembración de España.

Por la vuelta de una 'mili' obligatoria

En distintos países de nuestro entorno se ha abierto el debate para el retorno del Servicio Militar

Hemos terminado el verano con la noticia de que el Reino de Marruecos ha optado por reinstaurar el servicio militar obligatorio, que durante un año obligará a hombres y mujeres de entre 19 y 25 años a formar parte de las fuerzas armadas. La explicación oficial pasa por instruir en disciplina y valores cívicos a la juventud, algo importante en un entorno cultural donde el islamismo prende con facilidad según ha quedado demostrado con las autoproclamadas primaveras árabes. No obstante, esto puede significar dos posibles efectos colaterales para España: por un lado, un aluvión de solicitudes de nacionalidad por parte de los jóvenes marroquíes residentes en nuestro país que quisieran eludir el servicio militar; por otra parte, la ambición histórica de Marruecos sobre territorios españoles (Ceuta, Melilla e Islas Canarias) es sobradamente conocida como para explicar por qué debe preocuparnos una militarización de la población de este país.

Pero en la otra orilla del Mar Mediterráneo también se plantean recuperar los servicios obligatorios para la juventud, eludiendo el término militar pero claramente en ese sentido. Las Repúblicas de Francia y de Italia son por ahora nuestros vecinos más próximos trabajando en esa vía. Las razones son evidentes: tráfico migratorio descontrolado, atentados yihadistas, pérdida de confianza en las instituciones... El Occidente cada vez más materialista había limitado la responsabilidad bélica en la minoría profesional de las Fuerzas Armadas y, poco a poco, empieza a darse cuenta del error que conlleva tener a la población al margen de semejante responsabilidad.

¿Y qué hay de España? De momento, recuperar el servicio militar obligatorio para la juventud es un debate que ni está presente ni se espera. Los secesionistas fueron quienes más pelearon en su momento por la suspensión y sus prioridades ahora mismo son otras (por ejemplo, continuar con el golpe de Estado en Cataluña y exprimir al débil Gobierno de Pedro Sánchez). Dicha suspensión fue obra del Partido Popular, que como mucho podría utilizar este debate como cortina de humo para otras cuestiones más que para defender un nuevo modelo de Estado y de Nación. En cuanto al resto de fuerzas políticas... ¿Cabe esperar una actitud favorable por parte de Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos? Lo vemos complicado.

Falange Española de las JONS considera necesario recuperar el servicio militar. Es fundamental que las nuevas generaciones de españoles comprendan la importancia de formar parte de nuestra comunidad popular y la responsabilidad que ello conlleva. Además de unas Fuerzas Armadas al servicio del pueblo español y no de los intereses mercantiles del neoliberalismo encarnado en la OTAN, debe ser el propio pueblo español quien también forme parte de esa defensa nacional mediante la instrucción militar y la asimilación de valores comunitarios. Nuestro país y nuestro pueblo merecen un Régimen mejor, donde la unidad y la justicia social estén garantizados, pero eso será imposible si no son los propios españoles quienes se vuelcan en su conquista y, sobre todo, en su defensa.

La electricidad alcanza su precio más alto

El recibo de la luz refleja el fracaso de la liberalización del mercado de la electricidad

El precio de la electricidad alcanza su máximo histórico desde 2009, fecha de la liberalización de dicho mercado. Sólo en el último año el aumento del precio roza el por ciento.

La privatización de las compañías eléctricas españolas y la posterior liberalización del mercado no han repercutido en mejores precios para el consumidor como el dogma liberal anticipa. Ha sido justo al revés.

El próximo invierno miles de familias españolas volverán a dejar apagada la calefacción pese a las bajas temperaturas porque les resulta imposible hacer frente a los recibos de la luz y el gas. El interés general exige por ello la intervención de un mercado que por si sólo no es capaz de garantizar al conjunto de los españoles el acceso a un servicio básico como es la electricidad.

La privatización y la liberalización no favorece al usuario

Es evidente el fracaso del modelo energético. El Estado debe volver a controlar este sector, clave para la economía. Para ello, las grandes compañías energéticas privatizadas por socialistas y populares deben ser renacionalizadas. Que vuelva a los españoles lo que los españoles levantaron con su esfuerzo.